

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL**



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310500220160135301
Proceso:	Ordinario
Demandante:	GLORIA AMPARO GÓMEZ MEJÍA
Demandado:	COLPENSIONES
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	24/03/2023
Decisión:	CONFIRMA Y MODIFICA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 27/03/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	GLORIA AMPARO GÓMEZ MEJÍA actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor MIGUEL ANGEL HURTADO GÓMEZ
DEMANDADA	COLPENSIONES
ORIGEN	Juzgado Segundo Laboral Circuito de Medellín
RADICADO	05001 31 05 002 2016 01353 01
TEMAS	Pensión de Sobrevivientes
CONOCIMIENTO	Consulta y apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art.13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por GLORIA AMPARO GÓMEZ MEJÍA en su propio nombre y en representación de su hijo menor Miguel Ángel Hurtado Gómez contra COLPENSIONES.

En atención al memorial aportado el 20 de noviembre de 2020¹ y a la escritura pública N°716 del 15 de julio de 2020 de la Notaría Novena del Círculo de Bogotá, se reconoce personería para representar los intereses de Colpensiones, como apoderada principal a la sociedad Palacio Consultores S.A.S. identificada con NIT.900.104.844-1. Asimismo, se reconoce personería para representar a dicha entidad como apoderada sustituta a la abogada Yessica Francedy Zapata Ramírez, identificada con la CC 1.037.612.627 y portadora de la TP 260.650 del C. S de la J.

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda²

La señora Gloria Amparo Gómez Mejía en su propio nombre y en representación de su hijo menor Miguel Ángel Hurtado Gómez formula demanda contra Colpensiones, pretendiendo se declare i) que el señor Luis Fernando Hurtado Aristizábal contaba con

¹ 02SegundsInstancia; 03SustitucionColpensiones0220161353.pdf

² 01PrimeraInstancia; 02Expediente0220161353.pdf, págs.4/9.

30 semanas cotizadas a Colpensiones en el año inmediatamente anterior a su fallecimiento; o en subsidio, más de 300 semanas cotizadas al ISS al 1° de abril de 1994; y en virtud de ello que **ii)** el señor Luis Fernando Hurtado dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes a partir del 21 de junio de 2015, por ser beneficiario del principio de la condición más beneficiosa; y se condene a Colpensiones **iii)** al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes; **iv)** retroactivo pensional; **v)** intereses moratorios o indexación; **vi)** costas y agencias en derecho y; **vii)** lo ultra y extra petita.

Fundamentó sus pretensiones en que el señor Luis Fernando Hurtado Aristizábal contrajo matrimonio con la demandante el 11 de marzo de 1995, conviviendo bajo el mismo techo hasta el 21 de junio de 2015 en que éste falleció, de dicha unión se procreó a Miguel Ángel hurtado Gómez, quien nació el 31 de marzo de 2003.

El causante cotizó a Colpensiones bajo distintos empleadores desde el 5 de enero de 1983 y hasta mayo de 2015, alcanzando 782 semanas de cotización, de las cuales, 300 semanas lo fueron al 1° de abril de 1994. En el año anterior a su fallecimiento, cotizó 30 semanas en el año inmediatamente anterior a su muerte por medio de Colombia Mayor como independiente, pagando el respectivo aporte para los meses de abril a mayo de 2015, pero el Estado no canceló el subsidio correspondiente.

El 27 de agosto de 2015, en nombre propio y en representación de su hijo, solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada mediante Resolución GNR 374635 del 23 de noviembre de 2015, advirtiendo que pese a acreditar la calidad de beneficiarios, el afiliado no reunió 50 semanas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento, ni 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior. El 17 de marzo de 2016 solicitó la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, misma que fue reconocida a través de Resolución GNR 119.952 del 25 de abril de 2016, en la suma de \$8.855.098 pesos en favor de cada uno de los beneficiarios.

Oposición a las pretensiones de la demanda:

i) Colpensiones³ se opuso oportunamente a las pretensiones de demanda, afirmando que tras estudiar la historia laboral del causante, para el 29 de enero de 2003, fecha en que entró en vigencia la Ley 797 del 2003, no estaba cotizando, por lo que debía acreditar los requisitos previstos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 esto es, haber cotizado un mínimo de 26 semanas dentro del año anterior a la vigencia de la precitada norma, o sea, entre el 29 de enero de 2002 y el 29 de enero de 2003, lo cual tampoco cumplió, y el fallecimiento tampoco se produjo entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, siendo innecesario verificar los requisitos restantes, por lo cual no existen los presupuestos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de conformidad con la condición más beneficiosa. Aduce, la imposibilidad de examinar si hay derecho en aplicación del Decreto 758 de 1990, ya que no puede acudirse a cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona al sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso. Excepcionó:

³ 01PrimerInstancia; 02Expediente0220161353.pdf, págs.98/104

inexistencia de la obligación de reconocer y pagar pensión de invalidez <sic> al demandante acudiendo a la condición más beneficiosa, aplicando el Decreto 758 de 1990, prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación, compensación e imposibilidad de condena en costas.

Sentencia de primera instancia⁴

El 26 de abril de 2018, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia condenando a Colpensiones a reconocer y pagar a la señora Gloria Amparo Gómez Mejía, y a su hijo menor, Miguel Ángel Hurtado Gómez, la pensión de sobrevivientes en un 50% para cada uno por el fallecimiento del señor Luis Fernando Hurtado Aristizábal, a partir del 21 de julio de 2015. Condenó al pago del retroactivo pensional liquidado entre el 21 de junio de 2015 hasta el 30 de abril de 2018 en la suma de \$14.553.680 pesos para cada uno de los beneficiarios, la cual deberá indexarse, y autorizó los descuentos en salud. Dispuso que la mesada pensional a partir del 1 de mayo de 2018, asciende para cada uno a \$421.404 pesos, con los incrementos de ley. Condenó al pago de la indexación de las condenas. Absolvió a la entidad del pago de intereses moratorios y la autorizó para descontar del retroactivo, la suma de \$17.710.196 pagados a la señora Gloria Amparo Gómez Mejía y a su hijo menor, por concepto de indemnización sustitutiva. Declaró no probada la excepción de prescripción y probada la excepción de compensación. Condenó en costas a la demandada, fijando agencias en derecho la suma de \$2'183.083. Ordenó acrecentar la pensión de sobrevivientes de la señora Gloria Amparo Gómez Mejía al 100% cuando su hijo Miguel Ángel Hurtado Gómez deje de ser beneficiario de la misma.

Para fundamentar lo decidido, concluyó que el señor Luis Fernando Hurtado Aristizábal en calidad de afiliado al SGSSP falleció el 21 de junio de 2015, siendo aplicable para la pensión de sobrevivencia el literal a) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, que exigía acreditar 50 semanas dentro de los 3 años al fallecimiento, requisito no satisfecho, toda vez que entre el 21 de junio de 2012 y el mismo día y mes del año 2015 solo cotizó 30 semanas. Por lo que analizó la prestación bajo los postulados de la condición más beneficiosa, según el criterio de la H CSJ en sentencia con radicado 38674 del 25 de julio de 2012, reiterada en la de radicado 45262 y la SL 4650 de 2017, con el cual se exige acreditar un mínimo 26 semanas cotizadas dentro del año inmediatamente anterior al fallecimiento, y 26 semanas de aportes en el último a la entrada en vigencia de la Ley 860 de 2003, requisitos de los cuales solo cumple el primero, por lo que tampoco cumple los requisitos para acceder a la condición más beneficiosa. Finalmente, acudió a la interpretación de la H. Corte Constitucional en torno a la posibilidad de aplicar el salto normativo de Ley 797 de 2003 a Decreto 758, con fundamento en lo dispuesto en la Sentencia SU 442 de 2016, con la cual concluyó acreditados los requisitos para acceder a la pretensión subsidiaria para considerar causada la prestación de sobrevivencia, por acreditar el causante 300 semanas antes de regir la Ley 100 de 1993.

⁴ 01PrimerInstancia; 02Expediente0220161353.pdf, págs.138/141

Señaló que el requisito de convivencia no es objeto de discusión en el proceso, por haber sido reconocida la calidad de beneficiaria de la cónyuge con el causante, por Colpensiones mediante Resolución GNR 119952 del 25 de abril de 2016

Recurso de apelación.

Inconforme con lo decidido, **Colpensiones** formuló recurso de apelación solicitando se revoque la sentencia de instancia, argumentando para ello que el principio de la condición más beneficiosa permite estudiar la norma anterior a la vigente para el momento en que se configuró la contingencia, más no es admisible que se estudie el derecho con cualquier norma que haya regulado el asunto, así, al no acreditar los requisitos de la Ley 797 de 2003, se podía estudiar la prestación con base a la Ley 100 de 1993, requisitos que tampoco satisfizo, pero no podía acudir al Acuerdo 049 de 1990, toda vez que según voces de la H. CSJ se pone en riesgo la sostenibilidad financiera, los principios de legalidad, plus activo de la norma y la convivencia simultánea diferentes a una situación, e inescindibilidad de la norma.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Concedido el término a las partes para alegar de conclusión en esta sede, solo **Colpensiones**⁵ lo describió de forma oportuna, reiterando los argumentos esbozados al momento de formular la alzada, agregando que, las Altas Cortes tienen diversidad de criterios para la aplicación de la condición más beneficiosa para los casos en que la contingencia se presenta en vigencia de Ley 797 de 1990, y se pretende aplicación del Decreto 758 de 1990, en tal sentido la Corte Constitucional mediante Sentencia SU 005 de 2018 previó que debe verificarse un test de procedencia, en que solo respecto de las personas vulnerables resulta proporcionado interpretar el principio de la condición más beneficiosa en el sentido de aplicar, de manera ultractiva, las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990; de tal manera que, solicita se tenga en cuenta la postura de la Corte Constitucional y se revoque la sentencia de primera instancia.

II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, es decir, por los puntos que fueron objeto de apelación. Igualmente, se surte el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, conforme al artículo 69 del CPTSS modificado por la Ley 1149 de 2007, y en acatamiento de la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia de radicado 7382 de 2015.

Vistos los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por la demandada, entiende la Sala, que el problema jurídico a resolver se restringe a determinar: **a)** La procedencia o no de la aplicación del principio de condición más beneficiosa, a fin de establecer la causación de la pensión de sobrevivientes deprecada en la demanda; **b)** si Gloria Amparo Gómez Mejía y su hijo menor Miguel Ángel Hurtado Gómez son sus beneficiarios, y en caso afirmativo, se analizarán **c)** las condiciones de disfrute de la prestación.

⁵ 02SegundaInstancia; AlegatosColpensiones0220161353.pdf

Hechos relevantes probados documentalmente:

- Gloria Amparo Gómez Mejía nació el 30 de mayo de 1970⁶.
- Luis Fernando Hurtado Aristizábal nació el 21 de octubre de 1962⁷.
- Gloria Amparo Gómez Mejía y Luis Fernando Hurtado Aristizábal contrajeron matrimonio en marzo de 1995⁸, unión de la que se procreó a Miguel Ángel Hurtado Gómez, el 31 de marzo de 2003⁹.
- Luis Fernando Hurtado Aristizábal falleció el 21 de junio de 2015¹⁰.
- Mediante Resolución GNR 374635 del 23 de noviembre de 2015, Colpensiones negó la solicitud de pensión de sobrevivientes, radicada por la demandante en su propio nombre y representación, y del menor Miguel Ángel Hurtado Gómez el 27 de agosto del mismo año¹¹.
- Según historia laboral actualizada al 20 de octubre de 2017, Luis Fernando Hurtado Aristizábal cotizó 786.64 semanas, entre el 24 de abril de 1985 y el 30 de mayo de 2015, de las cuales los periodos de octubre y noviembre de 2014 y febrero a mayo de 2015, los pagó a través del régimen subsidiado¹².
- actualizadas al 6 de julio de 2015 y 21 de septiembre del mismo año,
- El 17 de marzo de 2016 la demandante en nombre propio y de su hijo menor, solicitó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivientes¹³, la cual fue reconocida mediante Resolución GNR 119952 del 25 de abril de 2016¹⁴, en suma única en valor de \$8.855.098 en favor de la demandante en calidad de cónyuge, y la misma suma en favor de Miguel Ángel Hurtado Gómez como hijo menor.
- Declaraciones extra proceso rendidas por la demandante y Julia Esther Tobón Agudelo¹⁵.

a) Causación de la pensión de sobrevivientes

La norma vigente al momento de acaecer la contingencia de muerte del causante, rige las condiciones jurídicas para resolver la prestación de sobrevivientes. Luis Fernando Hurtado Aristizábal falleció el 21 de junio de 2015¹⁶ en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, cuyo numeral 2 consagra que tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

⁶ 01PrimerInstancia; 02Expediente0220161353.pdf, pág. 52

⁷ 01PrimerInstancia; 02Expediente0220161353.pdf, págs.48/49

⁸ 01PrimerInstancia; 02Expediente0220161353.pdf, págs.55/86.

⁹ 01PrimerInstancia; 02Expediente0220161353.pdf, pág. 57

¹⁰ 01PrimerInstancia; 02Expediente0220161353.pdf, pág.50

¹¹ 01PrimerInstancia; 02Expediente0220161353.pdf, págs. 68/72

¹² 01PrimerInstancia; 02Expediente0220161353.pdf, págs. 116/122 -Se valorará esta HL por ser más actualizada, y contener una densidad mayor de semanas acreditadas, contabilizando los aportes realizados por Régimen subsidiado, que en la aportada por la parte actora actualizada a julio de 2015, no se sumaban por presentar deuda por no pago del subsidio por el Estado en los periodos de marzo y mayo de este último año (págs. 63/67)

¹³ 01PrimerInstancia; 02Expediente0220161353.pdf, págs. 73

¹⁴ 01PrimerInstancia; 02Expediente0220161353.pdf, págs. 75/81

¹⁵ 01PrimerInstancia; 02Expediente0220161353.pdf, págs. 60/61

¹⁶ 01PrimerInstancia; 02Expediente0220161353.pdf, pág.50

“2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento.”

La documental previamente relacionada, informa que el causante cotizó 620.57 semanas durante su vida laboral, de las cuales, 30 lo fueron durante los tres años anteriores a la ocurrencia del deceso.

Lo anterior da lugar a estudiar la causación de la prestación bajo el principio de condición más beneficiosa, en primer término, en el tránsito legislativo Ley 797 de 2003 a Ley 100 de 1993, en segundo término, en el tránsito legislativo Ley 797 de 2003 al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, según el ajuste jurisprudencial plasmado por la H. Corte Constitucional en la sentencia SU 005-18.

Tránsito legislativo Ley 797 de 2003 a Ley 100 de 1993

La Sala de Casación Laboral de la H. CSJ ha determinado la viabilidad de aplicación del principio cuando el afiliado reúne los requisitos exigidos por la normatividad inmediatamente anterior a la vigente en el momento de su fallecimiento, por conllevar la expectativa legítima del derecho, puntualizando en la sentencia SL 4650 de 2017 que en el tránsito legislativo Ley 797 de 2003 a Ley 100 de 1993, *“durante dicho periodo (29 de enero de 2003 – 29 de enero de 2006), el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 continúa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condición más beneficiosa para las personas con expectativa legítima, ulterior a ese día opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional”*.

El causante Luis Fernando Hurtado Aristizábal, no se encuentra dentro de los parámetros exigidos por la H. Corte Suprema de Justicia para dejar causada la pensión de sobrevivientes bajo ese tránsito normativo, pues falleció el 21 de junio de 2015.

Esta Sala de Decisión Laboral ha venido apartándose respetuosamente de la postura adoptada por la Sala de Casación Laboral en cuanto a la temporalidad que prevé para la aplicación del principio en el referido tránsito legislativo, entendiendo que esa posición arriesga el derecho a la igualdad de los afiliados y beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social Integral, resultando contrario a la Constitución Política, máxime porque dicha restricción no existe cuando dicho principio se examina a la luz del tránsito legislativo existente entre la Ley 100 de 1993 primigenia y el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.

En ese sentido, la Corte Constitucional no ha impuesto ese límite y en sentencias como la SU-442 de 2016 y T-084 de 2017 ante la diversidad de criterios de las normas entre las Altas Cortes, que incluso podrían ser plausibles, el Juzgador está llamado a elegir la más favorable al afiliado o beneficiarios, y por ende más respetuosa de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana y que en últimas, realizan a la seguridad social como derecho fundamental, obligación del Estado y principio fundante del mismo.

El artículo 46 de la Ley 100 de 1993 primigenia, estableció que el afiliado cotizante activo dejaba causada la pensión de sobrevivientes, cuando hubiere sufragado al menos veintiséis (26) semanas durante toda su vida laboral o, siendo inactivo, cuando hubiere cotizado la misma densidad de semanas en el año inmediatamente anterior al deceso, condiciones que se encuentran satisfechas por el señor Hurtado Aristizábal, quien era cotizante inactivo desde el mes de mayo de 2015, y acreditó 30 semanas en el año inmediatamente anterior a su fallecimiento, comprendido entre el 1° de octubre de 2014 y el 30 de mayo de 2015.

Así las cosas, esta Sala **confirmará** la decisión de primera instancia por ser acreedor el causante de la condición más beneficiosa, pero por las razones aquí expuestas.

b) Condición de beneficiarios

El literal a) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, prevé que la compañera permanente supérstite, condición esgrimida por la demandante, es beneficiaria de la prestación, siempre que haya convivido con el causante, por lo menos durante los últimos cinco (5) años que antecedieron al fallecimiento; así mismo previó el literal c) como beneficiarios los hijos menores de 18 años, y los mayores de 18 y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios debidamente acreditados, siempre que dependieran económicamente del causante al momento de su muerte.

Sobre la calidad de la cónyuge y compañera permanente, es importante resaltar que la última y reiterada interpretación emanada de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en **sentencia SL1730 de 2020**, en la cual precisó que la exigencia de mínimo cinco (5) años de convivencia, era para aquellas (o) compañeras (o) o cónyuges supérstites de un pensionado y no para quienes alegaran la referida condición respecto de un afiliado fallecido, razón por la cual, esta Sala modificó su postura en torno a la exigencia el periodo de convivencia, a que estuviera garantizado aquel que permitiera hablar de la unión marital de hecho (2 años).

Dicha providencia, quedó sin efectos, en razón a que la Corte Constitucional en reciente **sentencia SU 149 de 2021** ordenó a la Sala de Casación proferir nueva sentencia “*en la cual observe el precedente adoptado por la Corte Constitucional, en el sentido de que, en los términos del artículo 47, literal a) de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, la convivencia mínima requerida para ostentar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, tanto para el cónyuge como para el compañero o la compañera permanente, es de cinco (5) años, independientemente de si el causante de la prestación es un afiliado o un pensionado*”;¹⁷ **esta Sala se vio precisada a retomar la postura anterior, en ese sentido.**

¹⁷ Sostuvo la C. Constitucional en el referido fallo de unificación que: “(...) **la autorización a los cónyuges y compañeros permanentes supérstites del afiliado fallecido que accedan a la pensión de sobrevivientes sin acreditar un período determinado de convivencia, “permite que un importante número de personas que, no haciendo parte del núcleo familiar del occiso, accedan al reconocimiento prestacional de carácter vitalicio, solo por acreditar periodos pequeños y nimios de convivencia, por demás accidentales y transitorios”.** (...) De la misma manera, esta interpretación es problemática respecto de la noción misma del matrimonio o de la unión marital de hecho, las cuales tienen dentro de sus elementos definitorios la convivencia estable y singular de los integrantes de la pareja. Es a partir de esa convivencia que se generan deberes jurídicos de solidaridad y mutuo socorro, con base en los cuales válidamente el Legislador

De esta manera, se advierte que, aun cuando en principio a la demandante Gloria Amparo Gómez Mejía, tenía la carga de acreditar que fue cónyuge del señor Hurtado Aristizábal, al menos durante los últimos cinco (5) años de su vida, no obstante, la calidad de beneficiaria de la demandante no fue discutida en el proceso, siendo previamente aceptada por Colpensiones al reconocerle y ordenar el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, por medio de la Resolución GNR 119952 del 25 de abril de 2016¹⁸, en que incluyó como beneficiarios a los hoy demandantes, en calidad de cónyuge e hijo menor de edad. Así lo ha aceptado la H. Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencias con Rad. **36134 del 28 de julio de 2009** y N° **37387 del 3 de febrero de 2010**¹⁹ y más reciente, **SL 4531 del 6 de agosto de 2019**, donde reitera tal postura, criterio que comparte esta Sala de Decisión.

Por las razones expuestas, se **confirmará la sentencia**.

c) condiciones del disfrute de la prestación

EL señor Hurtado Aristizábal falleció el 21 de junio de 2015, por tanto, a partir del día siguiente opera el disfrute de la prestación en favor de sus beneficiarios, aspecto en que se **modificará** la sentencia de instancia, prestación que se reconocerá inicialmente en el caso de la señora Gloria Amparo Gómez Mejía, en un 50% de la mesada, porque, en ese entonces Miguel Ángel Hurtado Gómez, hijo del causante, era mejor de edad, dado que nació el 31 de marzo de 2003 y arribó a los 18 años de edad el mismo día y mes del año 2021.

previó determinados requisitos y plazos predicables al caso examinado. En este sentido, el Legislador, dentro de su amplio margen de apreciación en materia de diseño de las prestaciones en materia de seguridad social, impuso el requisito de convivencia como un medio adecuado para garantizar que la pensión de sobrevivientes se reconozca a los beneficiarios a partir de sus finalidades, sin que lo dicho constituya un juicio abstracto sobre la constitucionalidad del requisito de convivencia o la imposibilidad de que posteriormente el Congreso de la República pueda variar dichos requisitos.

¹⁸ 01PrimerInstancia; 02Expediente0220161353.pdf, págs. 75/81

¹⁹ “(...) *también ha sido criterio adocetrinado de esta Sala de Casación Laboral, que sin desconocer que la cónyuge sobreviviente o compañera o compañero permanente es quien jurídicamente y de acuerdo con lo atrás analizado tiene la carga procesal de probar que convivió o hizo vida marital con el causante hasta su muerte, **ha de tenerse por cumplida esa fatiga probatoria, cuando la <convivencia> es aceptada por la administradora de pensiones para el caso el Instituto de Seguros Sociales**, que fue lo que aconteció en esta oportunidad como se verá al desatarse la acusación contenida en el segundo cargo.*”

Y esa <aceptación> es dable derivarla de la actuación surtida dentro del trámite administrativo interno que adelanta la entidad de seguridad social para resolver una petición de pensión, como por ejemplo cuando allí se establece la condición de cónyuge de la interesada y miembro del grupo familiar del asegurado fallecido y por ende beneficiaria de la prestación de sobrevivientes o en su defecto de la indemnización sustitutiva, y se allega prueba de ello al proceso, o, porque dentro de la contienda judicial al darse contestación al libelo demandatorio, el demandado ISS admite como cierto el hecho de la convivencia entre cónyuges; quedando en ambas eventualidades, por fuera del debate probatorio tal exigencia legal, trayendo como consecuencia que bajo estas circunstancias, en la sentencia a proferir se tenga por demostrado ese requisito.

Es más en lo que respecta a los beneficiarios de la indemnización sustitutiva a que hace referencia el artículo 49 de la Ley 100 de 1993, son los mismos a los que alude el artículo 47 ibídem modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que señala quienes “son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes”, entre los cuales incluye a la cónyuge supérstite del afiliado o pensionado. Por lo tanto, conforme lo expresó la Sala en sentencia del 12 de diciembre de 2007 radicado 31055, “si los requisitos para la pensión de vejez no están satisfechos para la fecha de fallecimiento, los eventuales beneficiarios de la pensión de sobrevivientes son los mismos de la indemnización sustitutiva, lo que quiere decir que quienes no tuvieron la condición de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, tampoco lo serán para la referida indemnización”. (Resalto original)”

Atendiendo al IBC y a la densidad de semanas cotizadas por el fallecido, la pensión de sobrevivientes equivale al salario mínimo mensual legal vigente para cada anualidad²⁰, y conlleva los aumentos anuales o periódicos autorizados por la Gobierno Nacional. Se reconocerá 1 mesada adicional por anualidad según lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, dada la causación del derecho con posterioridad al 31 de julio de 2011.

Colpensiones adeuda por concepto de retroactivo pensional **en favor de Miguel Ángel Hurtado Gómez**, liquidado entre el 22 de junio de 2015 y el 31 de marzo de 2021, en que cumplió 18 años, en cuantía del 50%, la suma de Veintinueve Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Veinticinco Pesos (\$29'157.825), como se muestra a continuación:

RETROACTIVO PENSIONAL			
Año	# mesadas	Valor mesada 50%	Total Retroactivo (mínimo)
2015	7 y 9 días	\$ 322.175	\$ 2.351.878
2016	13	\$ 344.727	\$ 4.481.451
2017	13	\$ 368.859	\$ 4.795.161
2018	13	\$ 390.621	\$ 5.078.073
2019	13	\$ 414.058	\$ 5.382.754
2020	13	\$ 438.902	\$ 5.705.720
2021	3	\$ 454.263	\$ 1.362.789
			\$ 29.157.825

Así mismo, la entidad reconocerá por concepto de retroactivo pensional **en favor de Gloria Amparo Gómez Mejía**, liquidado entre el 22 de junio de 2015 y el 31 de marzo de 2021, en cuantía de 50%, y a partir del 1° de abril de 2021 acrecentada en un 100%, totaliza la suma de Cincuenta y Tres Millones Trescientos Sesenta Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos (\$53'360.296)

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Valor mesada 50%	Total Retroactivo (mínimo)
2015	7 y 9 días		\$ 322.175	\$ 2.351.878
2016	13		\$ 344.727	\$ 4.481.451
2017	13		\$ 368.859	\$ 4.795.161
2018	13		\$ 390.621	\$ 5.078.073
2019	13		\$ 414.058	\$ 5.382.754
2020	13		\$ 438.902	\$ 5.705.720
2021	13	\$ 908.526 (a partir de abril)	\$ 454.263	\$ 9.085.260
2022	13	\$ 1.000.000		\$ 13.000.000
2023	3	\$ 1.160.000		\$ 3.480.000
TOTAL				\$ 53.360.296

De este concepto, se confirma la autorización emanada por la A Quo dada **a la demandada a descontar el valor de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social en salud**, con fundamento en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, y a lo decantado por la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en esta

²⁰ Artículo 48 Ley 100 de 1993.

materia⁵, así como el valor indexado del valor reconocido en favor de la señora Gómez Mejía y del hijo del causante, Miguel Ángel Hurtado Gómez por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes mediante Resolución GNR 119952 del 25 de abril de 2016²¹

A partir del 1 de abril de 2023, Colpensiones proseguirá pagando a la demandante por pensión de sobreviviente, una mesada equivalente al SMLMV y la mesada adicional de diciembre de cada anualidad.

El valor del retroactivo pensional, ha de reconocerse indexado en aras de garantizar que la demandante perciba lo adeudado en su real valor, por tanto se **confirma** en este aspecto la sentencia de instancia.

Para indexar, la demandada tomará la fórmula que ha sido avalada por la H. Corte Suprema de Justicia en la materia:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR} = \text{V. ACTUALIZADO}$$

Los valores con los que ha de reemplazarse la fórmula deben ser:

El ÍNDICE FINAL certificado por el DANE que corresponde al de la fecha en que se efectúe el pago;

El ÍNDICE INICIAL corresponde a la fecha de exigibilidad de cada mesada pensional, por tratarse de prestaciones periódicas.

El VALOR A INDEXAR corresponde al valor de cada mesada a indexar.

III. EXCEPCIONES

Las excepciones formuladas por las demandadas han quedado implícitamente resueltas, mereciendo especial pronunciamiento la de prescripción, que no operó, al no haber transcurrido entre la causación de la prestación, su reclamación y la radicación de la demanda, el periodo de tres años a que refieren los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS.

IV. COSTAS

En esta sede, las costas estarán a cargo de Colpensiones por haber resultado vencida en el recurso. Agencias en derecho en el equivalente a 1 SMLMV en 2023.

V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

²¹ 01PrimeraInstancia; 02Expediente0220161353.pdf, págs. 75/81

RESUELVE

PRIMERO. Confirmar, por razones distintas, la sentencia proferida el 25 de abril de 2018 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario de doble instancia promovido por Gloria Amparo Gómez Mejía en su propio nombre y representación del joven Miguel Ángel Hurtado Gómez contra Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, **modificándola** en el sentido de que el disfrute de la prestación lo será a partir del 22 de junio de 2015.

SEGUNDO: Modificar los numerales segundo y tercero de la sentencia de primera instancia, en cuanto al valor de la condena, precisando que Colpensiones pagará por concepto de retroactivo pensional en favor de **Miguel Ángel Hurtado Gómez**, la suma de Veintinueve Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Veinticinco Pesos (\$29'157.825), liquidado entre el 22 de junio de 2015 y el 31 de marzo de 2021, -en que cumplió 18 años-, en cuantía del 50%; y en favor de **Gloria Amparo Gómez Mejía**, la suma de Cincuenta y Tres Millones Trescientos Sesenta Mil Doscientos Noventa y Seis Pesos (\$53'360.296), valor liquidado entre el 22 de junio de 2015 y el 31 de marzo de 2021, en cuantía de 50%, acrecentando la mesada pensional a partir del 1° de abril de 2021 en un 100%.

La mesada pensional para el año 2022 se continuará pagando en favor de la señora Gloria Amparo Gómez Mejía en \$1.160.000, sin perjuicio de los aumentos anuales previstos en el art.14 de la ley 100 de 1993.

TERCERO: Confirmar en lo demás la sentencia conocida en apelación y consulta.

CUARTO: Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones. Agencias en derecho en el equivalente a 1 SMLMV en 2023.

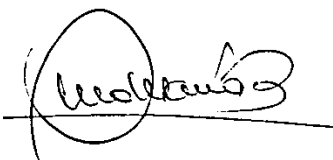
Notifíquese por edicto.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN